

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

**PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

Estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

Visto el estado procesal del presente asunto, se provee lo conducente respecto del análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en esta acción de inconstitucionalidad.

Para tales efectos, es importante precisar que el siete de junio de dos mil veintidós, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia bajo los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se declara la **invalidez** del DECRETO Núm. 323, por el que se expide la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de agosto de dos mil veinte, de conformidad con el apartado VI de esta decisión.

TERCERO La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a las personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en los apartados VI y VII de esta ejecutoria. (...)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

En el referido fallo se indicaron los siguientes efectos:

“VII. EFECTOS

68. En términos de los artículos 41, fracción IV, y 45, párrafo primero, en relación con el diverso 73, todos de la Ley Reglamentaria, es necesario fijar los alcances de esta sentencia, así como el momento a partir del cual surtirán sus efectos.

69. **Declaraciones de invalidez.** En el apartado VI de este fallo se declaró la invalidez del decreto 323 por el cual se emitió la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y/o Trastornos del Neurodesarrollo del Estado de Nuevo León, porque la consulta a personas con discapacidad que llevó a cabo el Congreso local no cumplió con los estándares aplicables de conformidad con lo desarrollado por esta Suprema Corte y los organismos internacionales.

70. **Momento en el que surtirán efectos las declaraciones de invalidez.** Con fundamento en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno ha determinado que las declaraciones de invalidez surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta sentencia.

71. Sin embargo, debe precisarse que en la jurisprudencia P./J. 84/2007 de rubro: **“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS”** este Tribunal Pleno estableció que sus facultades para determinar los efectos de las sentencias estimatorias que emite, por un lado, comprenden la posibilidad de fijar “todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda” y, por otro lado, deben respetar el sistema jurídico constitucional del cual derivan. Asimismo, sostuvo que los efectos que imprima a sus sentencias estimatorias en la vía de acción de inconstitucionalidad deben, de manera central, salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional violada, aunque al mismo tiempo se debe evitar generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las normas impugnadas, así como afectar injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estatales y/o municipales).

72. Lo anterior pone en claro que este Tribunal Pleno cuenta con un amplio margen de apreciación para salvaguardar de manera eficaz la norma constitucional violada. En ejercicio de tal amplitud competencial, al definir los efectos de las sentencias estimatorias que ha generado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que estos:

a) consistan únicamente en la expulsión de las porciones normativas que específicamente presentan vicios de inconstitucionalidad (a fin de no afectar injustificadamente el ordenamiento legal impugnado); **b)** se extiendan a la expulsión de

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

todo un conjunto armónico de normas dentro del ordenamiento legal impugnado (atendiendo a las dificultades que implicaría su desarmonización o expulsión fragmentada); c) se posterguen por un lapso razonable o, d) inclusive, generen la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a las expulsadas del ordenamiento jurídico para garantizar un mínimo indispensable de certeza jurídica (por ejemplo, en materia electoral).

73. En precedentes anteriores, este Tribunal Pleno ha establecido que la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de los ciento ochenta días naturales siguientes a que se notifiquen al Congreso los puntos resolutivos de la sentencia. En fechas recientes, y debido a la emergencia sanitaria por motivos del SARS-COV2, el Pleno modificó ese plazo a modo de dar más tiempo al legislador para llevar a cabo dichos procesos.

74. Sin embargo, y en vista de que las condiciones han cambiado, el Tribunal Pleno determina que la declaración de invalidez del decreto impugnado surtirá efectos a partir de los **doce meses siguientes a que se notifiquen al Congreso de Nuevo León los puntos resolutivos de esta sentencia**. El motivo de este plazo es que no se prive a las personas con discapacidad de los posibles efectos benéficos de la norma que se declara inválida sin que el Congreso de Nuevo León pueda emitir una nueva medida una vez realizada una consulta estrecha a las personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo de acuerdo con las consideraciones dispuestas en la presente ejecutoria.”.

De lo anterior, se desprende que la causa que generó la invalidez del Decreto combatido fue la falta de realización de una consulta conforme a los estándares para ser considerada compatible con los derechos de las personas con discapacidad previa a la expedición del Decreto 323 por el que se aprobó la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León.

Así, de una lectura integral de la sentencia, sus consideraciones, efectos y resolutivos, es posible advertir que su debido cumplimiento depende de que el Congreso del Estado de Nuevo León¹ cumpla dos lineamientos concretos:

- a) Desarrollar la consulta a las personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo; y

¹ La notificación de los puntos resolutivos dictados en este expediente, contenidos en el oficio SGA/MOKM/210/2022, al Congreso del Estado de Nuevo León, tuvo lugar el ocho de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio 4599/2022 del índice de esta Suprema Corte.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

- b) Legislar en materia de desarrollo e inclusión de las referidas personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo.

A) Realización de la consulta en materia inclusiva.

Como quedó indicado, la sentencia vinculó al Congreso estatal a realizar la consulta a las personas con condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo, como lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para posteriormente legislar lo correspondiente en la materia inclusiva con los ajustes que se estimen pertinentes, esto, dentro del plazo señalado con anterioridad.

Sobre dicho estándar, conviene realizar algunas precisiones.

El Tribunal Pleno, retomando la doctrina internacional existente sobre la materia, ha sostenido que los procesos de consulta a personas con discapacidad como mínimo su participación debe ser:

- a) **Previa, pública, abierta y regular.** El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
- b) **Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad.** Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

c) **Accesible.** Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

d) **Informada.** A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.

e) **Significativa.** Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

- f) **Con participación efectiva.** Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.
- g) **Transparente.** Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

Actuaciones de cumplimiento.

El Congreso del Estado informó a este Tribunal sobre las acciones encaminadas a demostrar la observancia de la sentencia; en ese sentido, se destaca lo siguiente:

- 1) En autos consta el acuerdo Administrativo número 525 de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables aprobado por el Pleno del Congreso estatal, mediante el cual se aprueban las mesas de trabajo en donde se convoca a todas las personas con la condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo, incluyendo a niñas, niños y adolescentes por conducto de sus legítimos representantes y

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren legalmente constituidas en el Estado, especializadas en la atención a personas con la condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo, así como a las autoridades del sector salud y educativo del Estado competentes, para que manifiesten su opinión sobre el expediente 15524/LXXVI relativo a la iniciativa que crea la Ley Para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo, para el Estado de Nuevo León.

- 2) Lista de asistencia y fotografías de la “Mesa de Diálogo y Análisis para la creación de una Convocatoria Incluyente y Accesible”, en la que participaron diversas dependencias del estado, expertos en la materia, sociedad civil, así como el equipo técnico del Congreso local.
- 3) Convocatorias publicadas en los diarios de mayor circulación en el Estado de Nuevo León y difusión en diversos medios.

Se advierte que la consulta se llevó a cabo en tres mesas de trabajo en distintas fechas, en el recinto oficial del Congreso del Estado y por medio de la página del citado Congreso local, a través de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables y con la participación de diversas autoridades Estatales y Municipales, especialistas en la materia, Asociaciones, Organizaciones y/o Instituciones de y para personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad con la condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo, familiares que los representan, sociedad civil y ciudadanía en general.

Cabe destacar que en la tercera mesa de trabajo se diseñó un formulario con y para personas con la condición del espectro autista y trastornos del neurodesarrollo para que pudieran expresar sus inquietudes, comentarios y sugerencias, lo cual se llevó a cabo en Lazos Centro, Lazos Norte y Lazos Sur, del Municipio de Apodaca, Nuevo León.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

Posteriormente, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que crea la Ley Para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León, la cual se turnó a Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, para su análisis y dictamen correspondiente.

En esa tesitura, es importante destacar que no corresponde a este pronunciamiento verificar si la consulta es válida desde el punto de vista sustantivo, ya que no fue materia de análisis en la presente ejecutoria, toda vez que el vicio de constitucionalidad que se buscó subsanar fue la omisión absoluta de consulta.

B) Emisión de la legislación correspondiente.

Con base en los resultados de dicho proceso, el referido Congreso aprobó el Decreto por el que crea la Ley Para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el treinta de junio de junio de dos mil veintitrés.

Lo anterior quedó acordado de conformidad en proveído de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro.

Determinación.

De lo anterior y del análisis integral de las constancias, se concluye que el Congreso del Estado de Nuevo León **dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito**, al:

a) Llevar a cabo un proceso de consulta conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte; y

b) Emitir y publicar el Decreto de referencia, que sustituyó al diverso invalidado, con observancia al mandato convencional correspondiente.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

En consecuencia, con fundamento en los artículos 44, 46, párrafo primero y 50 de la citada Ley Reglamentaria, **se declara cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.**

Maxime que las consultas realizadas y las normas que surgieron de las mismas, debieron ser materia de un nuevo medio de control constitucional; lo anterior por que si bien la Presidencia de este Tribunal está facultada para realizar un análisis sobre si se cumplió la sentencia, cierto es que corresponde al Pleno la determinación si una norma es inconstitucional, lo cual se haría por extensión en el supuesto que se concluya que las consultas no cumplieron con los parámetros fijados.

Archivo.

Toda vez que obran todas las notificaciones relativas a la sentencia y votos formulados en relación con dicho fallo², aunado a que resulta un hecho notorio que dicha resolución y votos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación,³ en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León,⁴ así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,⁵ una vez que cause estado el presente auto, **se ordena el archivo definitivo del expediente como asunto concluido.**

Formas de notificación.

Notifíquese por lista, por oficio a las partes y mediante diverso electrónico a la Fiscalía General de la República.

² Constancias que obran a fojas 1092, 1093, 1095 a 1099 del expediente.

³ Constancias que obran a fojas 1107 a 1118 del expediente

⁴ Constancias que obran a fojas 1140 a 1200 del expediente.

⁵ Consultar las publicaciones en las siguientes ligas:

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/30942>

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/46072>

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/44984>

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/45009>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 255/2020

Cúmplase.

Lo proveyó el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con **Fermín Santiago Santiago**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

Esta hoja corresponde al acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la acción de inconstitucionalidad 255/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Conste.** CAGV/RAHCH.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	HUGO AGUILAR ORTIZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AUOH730401HOCGRG05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633000000000000000000042ad	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	27/11/2025T06:09:54Z / 27/11/2025T00:09:54-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		40 aa e3 0e 74 9a bb 6b 28 d0 34 e4 e8 e7 57 10 31 00 ff ca 11 dd 2a c2 f6 da a2 23 d1 a0 91 1b 99 32 6d a1 01 f8 29 d4 9c 5a 1c 2c 0b 9b 47 0a 3a 32 f8 c2 50 e1 5e 18 b8 9b 9c 3b 66 14 30 43 e6 44 5f 63 36 16 c1 1f 1c 4d 72 13 fa 55 16 52 18 3f 38 47 f2 e0 b2 84 4d 32 34 47 6f 0f ff 8f 07 a6 1a f7 a3 d9 1e bb c6 ec a0 07 20 60 c4 3f 52 8b c2 fe ae a2 c3 6d 0f 05 21 ad d5 1c 4c 3b 79 68 75 51 20 7b 0e de 5c 11 de d2 2d e2 62 3f 84 d7 bc 60 9a 44 e7 ff 0f 3d 00 e1 bd d1 e8 30 d2 f5 aa 93 50 e2 e2 d9 8f ff 28 62 99 e7 b7 87 27 af 97 0c 0b 55 83 cb 78 aa a3 e7 b5 e9 55 e6 8e ef 62 20 61 da 03 3f 6a 5c 8f e6 eb b5 a9 4a 70 36 1a 24 57 a9 f3 5e ef 11 81 c1 94 c3 55 4f 4f a4 85 58 58 5e 4e b0 5e 54 51 96 5a fb 00 b2 8d 17 78 4c 19 3e 4d 2c d1 21 26 89 ea af df b1 36 3c 0c 19 53 9b 1c 55 e4 5b ec ce 2a ee dd 1a 35 0b			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	27/11/2025T06:09:54Z / 27/11/2025T00:09:54-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633000000000000000000042ad			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	27/11/2025T06:09:54Z / 27/11/2025T00:09:54-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	773198			
	Datos estampillados	4DF0C9A137F045FA99A74FFCCACCE4EC32CF2FEC4C3731CC391E77D13F8A33D6103			

Firmante	Nombre	FERMIN SANTIAGO SANTIAGO	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	SASF820211HOCNNR06			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633200000000000000000007587	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T19:53:40Z / 26/11/2025T13:53:40-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		91 65 25 3f 8c 77 0d 8f 42 1c b0 92 ca ad ab 00 02 50 c6 83 cf 4e 49 84 aa 17 28 57 da 9c 75 7a 20 0a 62 5a ee 0a 78 fd 22 e4 49 b5 ec b4 79 09 da 31 a4 e3 03 2f f3 b3 aa 11 93 6b 38 77 e1 c6 e7 ac 30 ab 4a a4 b6 80 6b d6 95 49 a4 20 37 c3 81 ec 33 91 3a 61 f5 e5 ce 4d d3 ba d7 cd e7 66 8b 00 ec f5 27 55 8e c4 a3 5a 1f 75 9f b7 73 05 ed 94 77 d1 eb cd 0f 4f aa dc ff 1d d6 41 88 61 44 46 7b 9f 71 51 20 a6 3c 3c 70 71 62 cc ca db d5 7b 58 33 cc 28 28 30 76 c5 c4 df a9 1c d8 f5 8e 20 14 86 e7 6f e8 6f 36 7d b4 18 8b 77 fe 11 0f f8 9a cc 1c 2b 3f 8d cf 30 ce 34 8c 1c 3a 68 62 f2 f6 54 d7 4d aa df b3 6f ca 37 c8 f8 7d d2 4d a3 7a ce 6c c0 1d 1c 93 2e 17 51 08 c7 2a 1e d3 26 4d 7e 7a a6 c5 4d e0 55 74 96 1b 8c 97 39 bd 5f 61 5f 60 fe 73 25 25 72 07 d6 6f 94 10 b8			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T19:53:40Z / 26/11/2025T13:53:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633200000000000000000007587			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	26/11/2025T19:53:40Z / 26/11/2025T13:53:40-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	769967			
	Datos estampillados	9091DAE3327C5B437A39792DE5183051296327957B91D9AA061E6451A01A8AD1784D01			